



OPINIÓN

¿POR QUÉ DESESTABILIZAR?

Primera parte
Por Guillermo Buendía

Los objetivos de la guerra judicial y sucia del FAM persiguen eliminar los riesgos que penden sobre el Estado neoliberal -construido a través de las "reformas estructurales" hechas durante tres décadas- de continuar las transformaciones del proyecto lopezobradorista en el próximo sexenio. En el tramado opositor, el INE-TEPJF es la punta del iceberg de la ofensiva contra lo que Lorenzo Meyer en El cactus y el olivo: las relaciones de México y España (México, 2022) describe como la "legitimidad de la autoridad (del sufragio universal)", cuando el ejercicio crítico de este derecho constitucional tiende a modificar el orden establecido de privilegios de unos cuantos.

El autor narra brevemente el contexto histórico en el cual aparece Joaquín de Arenas financiando acciones conspiratorias. Hoy, Claudio X. González Guajardo es quien, a través de un gran número de organizaciones de la sociedad civil subvencionadas por el gran capital, dirige la oposición del PRI-PAN-PRD, incluso con financiamiento estadounidense, buscando

crear las condiciones político-electorales para recuperar el poder público y ponerlo nuevamente al servicio de los negocios palaciegos, sin ninguna consideración sobre el rol crucial de un Estado garante de la soberanía y seguridad nacionales.

El retorno de un régimen político a modo de los intereses del capitalismo salvaje es la razón por la cual la lucha política se ha polarizado. Ese régimen responde a los intereses económicos del reparto del mundo hecho por las grandes potencias del G7. El suministro de insumos e integración de las cadenas productivas globales forman parte del proyecto económico encargado a José Ángel Gurría (los sectores extractivos, petrolero y eléctrico nacionales están en la mira de la expansión imperialista de los monopolios extranjeros y filiales locales) y son los planteamientos ofrecidos por la senadora Xóchitl Gálvez en sus encuentros con las cúpulas empresariales. La embestida política-judicial, reflejada en los me-

dios corporativos y redes sociales, patrocinada por una fracción del gran capital, poderosa por sí misma, no se puede dimensionar sin el entorno que las transformaciones lopezobradoristas han producido al régimen fiscal y contractual (se reformó el marco legal para eliminar la condonación y devolución de impuesto y se dio carácter punitivo a la práctica de las factureras; se revisan y negocian los términos "leoninos" firmados para quitar la pesada carga de pagos perjudiciales a la hacienda pública) sin instrumentar medidas legales como la satanizada facultad expropiatoria o la cancelación de concesiones de bienes nacionales. El modelo económico sigue operando para repuntar el desarrollo sustentable bajo políticas públicas redistributivas de la riqueza como condición necesaria para la estabilidad política del régimen democrático.

Sin embargo, esta fracción "mandona" presiona las funciones "arbitrales" del INE y públicas del Poder Judicial para dirigir el proceso sucesorio hacia el "desplazamiento" de Morena del poder, y en este camino, acotar las facultades presidenciales y derechos políticos y garantías constitucionales con medidas "legales" motivadas en la equidad de la contienda

electoral, favoreciendo con éstas a la coalición patronal PRI-PAN-PRD.

Las acciones desestabilizadoras marchan sobre condiciones de confrontación política cada vez más críticas. La politización y participación social se han traducido en movilizaciones organizadas de base que rechazan la concentración de la riqueza y los insultantes privilegios de la clase política y judicial al servicio de los intereses de poderosos empresarios y monopolios extranjeros. La escandalosa corrupción de la estructura judicial presentada como "derechos adquiridos" -protegida por años por la ASF al no sancionar los subejercicios anuales desviados a fideicomisos para fonder pensiones y otras prerrogativas "complementarias" no previstas en la ley- hace de la guerra judicial un conflicto irresoluble como ilegal que atenta contra la transición pacífica a la democracia participativa.

*guillermobuendia80@gmail.com

El retorno de un régimen político a modo de los intereses del capitalismo salvaje es la razón por la cual la lucha política se ha polarizado. Ese régimen responde a los intereses económicos del reparto del mundo hecho por las grandes potencias del G7.